

Señores

**MAGISTRADOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE (Reparto)
E.S.D**

**REF.: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO CONTRA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
Y POLICÍA NACIONAL**

ACTOR: ARTURO MANUEL AMELL PEREZ

CLAUDIA JIMENA GONZALEZ GARCIA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Apoderado del señor **ARTURO MANUEL AMELL PEREZ**, quien será la parte Actora en el presente proceso, de manera respetuosa me permito presentar **DEMANDA DE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** que consagra el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo contra las entidades de servicio público, en este caso, **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL**, que serán las partes demandadas, representadas legalmente por el señor Ministro de Defensa Nacional Doctor ... y por el señor Director General de la Policía Nacional, General **JORGE HERNANDO NIETO ROJAS** y/o quienes hagan sus veces, ambos mayores de edad, domiciliados y residentes en la ciudad de Bogotá D.C., para que se profiera sentencia sobre las siguientes peticiones:

CAPÍTULO I

DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERA: Declárase **NULO Resolución N° 04187** de fecha 27 de Junio de 2016, emitido por la Dirección General de la Policía Nacional, por el cual retiró del servicio activo de la Policía Nacional al señor Patrullero de la Policía Nacional **ARTURO MANUEL AMELL PEREZ**, así como el fallo disciplinario DEVAL 2014-57 de fecha 15 de abril de 2016, proferido por el Jefe de la Oficina de Control disciplinario Interno del Departamento de Policía Valle, y el auto de fecha 19 de mayo de 2016, mediante el cual confirmo

el fallo de primera instancia proferido por el señor teniente Coronel Inspector Delgado de la Región 4 de Policía, mediante el cual destituyeron al actor, notificado personalmente de la citada resolución el día 12 de julio de 2016 y su correspondiente auto aclaratorio de fecha 4 de octubre de 2016.

SEGUNDA: Que a título de **RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, la entidad demandada **REINTEGRE** al servicio activo de la Policía Nacional al señor Patrullero **ARTURO MANUEL AMELL PEREZ**, sin solución de continuidad, desde el día 4 de octubre de 2016, fecha del retiro, hasta que sea reintegrado al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría y al grado que le corresponda conforme a su antigüedad y curso de promoción, como también reconocer y pagar al Demandante o a quién represente sus derechos, las siguientes calidades líquidas de dinero:

a.- Para indemnizar el perjuicio moral, ordénese a las entidades convocadas pagar al señor **ARTURO MANUEL AMELL PEREZ**, la suma equivalente a **CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES**, o la suma que sea del caso, de acuerdo con la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, más los intereses moratorios que correspondan, todo con sujeción a lo previsto en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, como compensación a los momentos de angustia, zozobra, sufrimiento y depresión, también como retribución al daño moral, ético, social y profesional sufrido por el Actor con la expedición de los Actos Administrativos acusados.

b.- Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad, y a título de restablecimiento de los derechos de mi mandante, se declare para todos los efectos legales relacionados con prestaciones sociales, tiempo de servicio, ascensos y grados policiales, tener en cuenta que no ha existido solución de continuidad en los servicios prestados por mi poderdante a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, entre la fecha de su retiro y aquella en que se produzca su efectivo reintegro a la Institución y se ordene a la misma que así lo haga constar en la hoja de vida del Patrullero **ARTURO MANUEL AMELL PEREZ**.

TERCERO: Que todos los pagos que se ordene hacer a favor del señor Patrullero **ARTURO MANUEL AMELL PEREZ**, o de quien sus derechos represente, le sean cubiertos en moneda de curso legal en Colombia, ajustando su valor con base en los índices de precios al consumidor certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) o por la entidad que eventualmente llegare a hacer sus veces.

CUARTA: Que si no se efectúa el pago en forma oportuna, la demandada liquide los intereses comerciales y moratorios hasta que le dé cabal cumplimiento al Auto de Aprobación del Acuerdo Conciliatorio que profiera la jurisdicción Contencioso Administrativa conforme lo prevé el artículo 195 del C.P.A.C.A.

QUINTA: Que se condene a la entidad demandada al pago de costas y agencias en derecho Artículos 188 del C.P.A.C.A. y conforme a los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

CAPÍTULO II.

HECHOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LA PRESENTE ACCIÓN

Los hechos que sirven de fundamento para la presente acción, según lo narrado por mi poderdante, en síntesis son los siguientes:

- 2.1 Mi Mandante señor Patrullero **ARTURO MANUEL AMELL PEREZ**, tenía de tiempo de servicio en la Policía nacional 5-11-28, y para la fecha de los hechos contaba con 26 años de edad.
- 2.2 El día 31 de octubre del 2013, en el Municipio de Buga, fue capturado, por los presuntos delitos de concierto para delinquir, Hurto calificado, Porte ilegal de armas de fuego, Lesiones personales, conforme a la orden de captura expedida por la Fiscalía 2 Seccional de Buga.
- 2.3 Mediante Auto de fecha 31 de octubre del 2013, conforme a lo anterior, la Oficina de Control disciplinario Interno DEVAL, expide Auto ordenando Indagación

Preliminar, bajo el proceso Radicado No. 2013-266, comisionando al funcionario respectivo para realizar la investigación, quien mediante oficio fechado noviembre 05 del 2013, solicita a la Fiscalía correspondiente copia de todas las decisiones y actuaciones realizadas en el proceso penal que cursa contra mi representado.

- 2.4 Mi prohijado es notificado el día 10 de diciembre del 2013, de la apertura de la indagación preliminar en su sitio de reclusión. Inicia la correspondiente investigación y el día 28 de diciembre del 2013, me posesiono como defensora del Señor Arturo Manuel Amell Perez.
- 2.5 El 30 de abril del 2014 se realiza el Auto de apertura de Investigación disciplinaria con el radicado No. 2014-57, y que fue notificado a mí prohijado el día 06/05/14.
- 2.6 Se glosa al respectivo expediente el Acta de Audiencia donde se realizó Formulación de acusación, proveniente del Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga, fechada 06 de Agosto del 2014 y copia del respectivo escrito de Acusación.
- 2.7 El día 17 de Noviembre del 2014, el Despacho de la Oficina de Control Disciplinario del Departamento de Policía Valle, realiza auto ordenando pruebas de oficio, dentro de las cuales se encuentra escuchar en diligencia de declaración al Señor JULIAN ANDRES RENGIFO MUÑOZ, autor material de todos los delitos y quien realizo principio de oportunidad con la Fiscalía.
- 2.8 El día 24 de Noviembre del 2014, siendo las 9:00 horas, fecha establecida por el despacho para recibir la declaración del Señor Julián Andrés Rengifo, nos dirigimos a la Cárcel distrital de Buga, donde se encontraba detenido el mismo, y quien manifestó no conceder la declaración toda vez que el proceso penal continuaba, que ya había dicho todo en ese proceso y que además fue aconsejado por los funcionarios del CTI, no decir nada, constancia que obra en el respectivo expediente.

-
- 2.9 El día 26 de Noviembre del año 2014, conforme a la prueba decretada de oficio por el despacho, se realizó diligencia de declaración del PT. DIDIER ARANGO MESA, quien para dicha fecha ya se encontraba retirado de la policía Nacional y quien tampoco quiso dar ningún tipo de declaración en el presente caso, y quien según el despacho la Fiscalía había relacionado como “testigo” de los hechos, que se presentaron el Municipio de Buga.
- 2.10 El despacho el día 30 de Abril del 2015, realiza Auto de Prorroga, manifestando haber agotado el término de la investigación, habiendo sido infructuosa la misma.
- 2.11 El día 02 de Julio del 2015, el funcionario delegado por la Oficina de Control Disciplinario DEVAL, realiza diligencia de inspección judicial al Expediente SPOA 76111-6000-165-2012-00862 a la Fiscalía 27 Seccional de Buga, de donde extrae algunos elementos materiales probatorios, como entrevistas y declaraciones juradas dadas ante dicha fiscalía, por algunos testigos del proceso penal, inclusive algunas pruebas técnicas, realizándose el traslado de las mismas al proceso disciplinario.
- 2.12 Con fecha 24 de Agosto del 2015, me notifique de manera personal del Pliego de cargos que se elevó en contra del Señor Patrullero ARTURO MANUEL AMELL PEREZ, pronunciándome sobre dicho pliego de cargos mediante escrito fechado el día 07/09/2015, donde solicite la nulidad de dicho pliego de cargos, que había sido fundamentado en la pruebas trasladadas del proceso penal, que no habían surtido la contradicción en el proceso disciplinario.
- 2.13 El día 01 de octubre del 2015, el despacho no accede a decretar la nulidad de pliego de cargos y me notifica personalmente de dicha decisión.
- 2.14 El día 16 de Octubre del 2015, presento Recurso de Reposición contra dicho auto, reiterando al despacho que dichas pruebas sobre las cuales se pretendía cimentar el liego de cargos, no son pruebas ya que no pudieron ser controvertidas por la defensa, vulnerándose el debido proceso.

- 2.16 Mediante auto de fecha 29 de Octubre del 2015, es despacho resuelve favorablemente la solicitud de nulidad planteada por la suscrita e igualmente manifiesta que teniendo en cuenta que la prórroga para la práctica de pruebas expira el próximo 30/04/2014, expira el 30/04/2015, y en consideración al traslado de las evidencias allegadas del proceso penal se ordena el auto de prórroga para extender la misma.
- 2.17 Mediante auto de Fecha 30 de octubre del 2015, el despacho prorroga el termino de instrucción por nueve (09) meses y en la misma fecha, el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno DEVAL, dispone correr traslado de las diligencias procesales allegadas desde la jurisdicción penal con el fin de que los investigados conozcan las mismas y ejerzan su derecho de contradicción y defensa.
- 2.17 El mismo 30 de octubre del 2015, se realiza el auto corriendo traslado de las diligencias allegadas del proceso penal.
- 2.18 El día 11 de noviembre del 2015, el despacho expide auto decretando nulidad de oficio, y decreta de oficio la nulidad del auto de prorroga que había realizado el 30/10/2015, y convalida todas las pruebas allegadas y practicadas válidamente dentro de la actuación, al igual que las decisiones proferidas por ese despacho.
- 2.19 El día 17 de Noviembre del 2015, se accede a la práctica de pruebas testimoniales solicitadas por la suscrita, entre ellas la declaración del Señor JULIAN ANDRES RENGIFO MÑOZ., y el despacho fija fecha para la práctica de las mismas.
- 2.20 Se realizan las diferentes declaraciones, exceptuando la del Señor JULIAN ANDRES RENGIFO MUÑOZ, quien nuevamente se negó a dar declaración, diligencia a la cual asistió el jefe de la Oficina de Control Disciplinario de la Policía Metropolitana del Valle, a quien tampoco quiso dar declaración dicha persona, y quien inclusive se portó agresivo con la suscrita.

-
- 2.21 En el mes de Febrero del 2016, el despacho nuevamente eleva pliego de cargos contra mi representado.
- 2.22 El día 24 de febrero del 2016, presento al despacho el respectivo memorial de descargos.
- 2.23 El día 29 de febrero del 2016, el despacho no accede a la nulidad del pliego de cargos, presentada por la suscrita el día 10 de marzo del 2016, presento recurso de reposición contra dicho auto, reiterando lo de la falta de pruebas y el traslado realizado del proceso penal.
- 2.24 El despacho nuevamente niega mi solicitud de nulidad y el día 28 de marzo profiere auto para alegatos de conclusión, los cuales son presentados por esta defensa el día 11 de abril del 2016.
- 2.25 El día 15 de abril del 2016, el Jefe de la oficina de control disciplinario, profiere fallo de primera instancia.
- 2.26 Mediante escrito presentado el 27 de abril del 2016, la suscrita sustenta recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.
- 2.27 Mediante auto de fecha 19 de Mayo del 2016, El Teniente Coronel BORIS ALBERTO ALBOR GONZALEZ, Inspector Delegado Región de Policía Cuatro, confirma la decisión proferida por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Valle.
- 2.28 Con fecha 27 de Junio del 2016, El General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS, Director General de la Policía Nacional, expide la Resolución Número 04187 del 27 de Junio del 2016, en la cual ordena retirar del servicio activo de la policía Nacional a mi representado, entre otras.
- 2.28 El día 12 de Julio del 2016 mi representado es notificado de dicha Resolución, pero fue notificado de la Resolución con fecha 21 de Junio del 2016, es decir dicha notificación personal fue mal elaborada, en el comisionado por la

Oficina de Control disciplinario de la Policía metropolitana del Valle.

- 2.29 Al percatarse la Policía nacional de dicha irregularidad el día 04 de Octubre del 2016, expide la Oficina de Control Disciplinario Interno DEVAL, el auto aclaratorio Corrigiendo la fecha de expedición de la Resolución y una vez más vulnerando los derechos de mi representado lo notifica personalmente de dicho auto, el 04 de octubre del 2016, fecha hasta la cual permaneció activo en la Policía Nacional, dejándole claro que los efectos de dicha Resolución, se causaron desde el día 12 de Julio del 2016, fecha en la cual se realizó la indebida notificación.

CAPÍTULO III.

DERECHO

El Acto Administrativo Resolución No **04187** de fecha 27 de Junio de 2016, emitido por la Dirección General de la Policía Nacional, por el cual retiró del servicio activo de la Policía Nacional al señor Patrullero de la Policía Nacional **ARTURO MANUEL AMELL PEREZ**, así como el fallo disciplinario DEVAL 2014-57 de fecha 15 de abril de 2016, proferido por el Jefe de la Oficina de Control disciplinario Interno del Departamento de Policía Valle, y el auto de fecha 19 de mayo de 2016, mediante el cual confirmo el fallo de primera instancia proferido por el señor teniente Coronel Inspector Delgado de la Región 4 de Policía, mediante el cual destituyeron al actor, notificado personalmente de la citada resolución el día 12 de julio de 2016 y su correspondiente auto aclaratorio de fecha 4 de octubre de 2016, se encuentra viciado de nulidad por desviación de poder, falsa motivación, expedición irregular del acto administrativo.

CAPÍTULO IV

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Con los Actos Administrativos objeto de reproche, se vulneró el Debido Proceso artículo 29 de la Constitución Nacional, la ley 734 de 2002, en sus artículos 92, numeral 4, artículo 135 para explicar el por qué se aducen como norma transgredida se hace

necesario transcribir los artículos 29 constitucional, 92, numeral 4 y 135 de la ley 734 de 2002, así:

Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

ARTICULO 29. “... El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas...

...Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso...”

Ley 734 de 2002.

Artículo 92. Derechos del investigado. Como sujeto procesal, el investigado tiene los siguientes derechos:

(...)

1.

4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir en su práctica.

5. (...).

Conforme al artículo 135 que indica:

“ ... ARTÍCULO 135. PRUEBA TRASLADADA.

Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país y los medios materiales de prueba, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código.

También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación del escrito de acusación en el proceso penal, aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia

del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o evidencias físicas deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso disciplinario.

Cuando la Procuraduría General de la Nación o el Consejo Superior de la Judicatura necesiten información acerca de una investigación penal en curso o requieran trasladar a la actuación disciplinaria elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, así lo solicitarán al Fiscal General de la Nación. En cada caso, el Fiscal General evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales de prueba o evidencias físicas puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma...”.

El citado artículo, en su inciso segundo indica, que “podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación del escrito de acusación en el proceso penal, aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o evidencias físicas deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso disciplinario”.

Si bien, la reforma realizada al Código Disciplinario Único en la parte procesal, permite traer de los procesos penales elementos materiales probatorios y evidencia física, estos por si solos, no tiene la calidad de pruebas, como bien lo deja claro el mismo artículo 135 en su inciso segundo, “... aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas”.

Para que estos elementos materiales probatorios y evidencia física, sean válidos como pruebas en el proceso disciplinario, deben surtir la contradicción, para que sea realmente una prueba, a no ser que ya se haya surtido la contradicción por la parte que le afecta en el otro proceso, situación que no sucedió.

El artículo 185 del código de procedimiento Civil, indica “...**ARTÍCULO 185. PRUEBA TRASLADADA.** Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella...”.

En igual sentido lo expresa el Código General del Proceso en su artículo 174.

“...Artículo 174. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales...”.

Si bien cito estas normas procesales, es por expresa remisión del artículo 21 de la ley 734 de 2002, cuando indica que los casos no previsto en esta ley se aplicaran lo previsto en los tratados internacionales, código administrativo, código de procedimiento penal, código de procedimiento civil, siempre y cuando no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario.

Sobre este aspecto el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con ponencia del consejero CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, de fecha 9 de abril de 2014, Radicación número: 76001-23-31-000-2000-00550-01(29312), actor MARIELA GARCIA DE LOPEZ Y OTROS, contra la NACION - MINISTERIO DE HACIENDA - POLICIA NACIONAL, indico sobre la prueba trasladada así:

“... Sobre los medios probatorios obrantes en el expediente, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que aquellos que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no hayan sido solicitados en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hayan sido practicados con audiencia de ésta no pueden ser valorados en el *sub lite*2.

También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de pruebas haya sido solicitado por ambas partes, aquéllas pueden ser tenidas en cuenta, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el asunto del cual se traen y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que hagan parte del acervo probatorio y que luego, de resultar desfavorables a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión3.

Ahora, en el expediente obran copias auténticas del proceso penal Adelantado por la Fiscalía Seccional 40, por el delito de tentativa de homicidio enunciado por la señora Gloria Patricia López García4, las cuales fueron solicitadas por la parte demandante, sin que todas las entidades demandadas se hayan pronunciado al respecto; en consecuencia, los testimonios y declaraciones que obran en dicho

proceso no pueden ser valorados, pues no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, para el traslado de pruebas, en la medida en que no fueron practicados a petición o con audiencia de la parte acá demandada y tampoco fueron objeto de ratificación dentro del presente proceso contencioso administrativo...”.

Lo anterior para indicar que en toda la actuación procesal surtida en el proceso disciplinario, me encargue de hacerle ver al despacho que las supuestas pruebas, en que el despacho está sustentando el cargo, para endilgar una presunta responsabilidad a mi poderdante, NO LO SON, y que no existía prueba para tal fin, estos todos elementos materiales probatorios ya que el interrogatorio a indiciado y su declaración jurada del delincuente Rengifo Muñoz, al igual que la declaración jurada de la señora Flor Ángela Reyes, no han surtido el principio de la contradicción, además de la declaración jurada del Señor PT. DIDIER ARANGO MESA, quienes supuestamente eran los únicos testigos que tenía la fiscalía, pues en los diferentes eventos delictivos, solo observaron al Señor RENGIFO MUÑOZ.

Teniendo en cuenta lo anterior esta defensa desplego toda su actividad a demostrar que se estaba vulnerando con esto el debido proceso y que por tanto se constituye en una nulidad insanable, conforme al artículo 143 numeral 2 y 3 de la ley 734 de 2002, que indica:

“... **ARTÍCULO 143. CAUSALES DE NULIDAD.** Son causales de nulidad las siguientes:

1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

PARÁGRAFO. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento...”.

El mismo despacho decreto de oficio la declaración del señor Muñoz Rengifo, en más de dos ocasiones se trasladó hasta el centro de reclusión donde está recluso, sitio al cual acudió la

defensa para surtir el derecho de defensa y controvertir lo manifestado por él, y no fue posible que declarara, no entiende entonces esta defensa, como el despacho viene ahora a sustentar un cargo, proferir un fallo y endilgar una responsabilidad a mi representado, cuando sabe que no se pudo ejercer el derecho de contradicción, por ende en todo el desarrollo del proceso se vulnero el derecho de defensa, configurándose la causal segunda.

Al ser el derecho disciplinario sancionador, debe respetar las garantías de la consecución de los medios probatorios para endilgar una responsabilidad, siempre permitiendo el derecho de defensa a quien pretenda investigar por la presunta conducta disciplinaria.

Si tomamos el derecho disciplinario dentro de las actuaciones administrativas, ya que sus decisiones son contraladas por la justicia contenciosa Administrativa debe respetar igualmente el debido proceso.

En la sentencia C-124 de 2003 la Corte Indico:

“El Código Disciplinario Único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos. El CDU define las conductas que se consideran faltas disciplinarias, las sanciones en las que se puede incurrir y el proceso que debe seguirse para establecer la responsabilidad disciplinaria. (...)”. Sentencia C-712 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño. S. V. de Rodrigo Escobar Gil, Manuel José Cepeda Espinosa, Álvaro Tafur Galvis y Eduardo Montealegre Lynett.

Más adelante relaciona:

(...)

“c) El proceso disciplinario, esto es, el conjunto de normas sustanciales y procesales que aseguran la garantía constitucional del debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la correspondiente responsabilidad disciplinaria. Sentencia C-341 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell. A. V. de José Gregorio Hernández Galindo y S.V. de Hernando Herrera Vergara y Julio César Ortiz Gutiérrez. (...).

Al no realizarse el derecho de contradicción de los elementos materiales probatorios y evidencia física que el despacho traslado

del proceso penal, estas nunca alcanzaron el valor de prueba, por lo tanto, al sustentar un cargo sin pruebas y más aún proferir un fallo, se está ante una vulneración flagrante del debido proceso, configurándose una irregularidad del rango constitucional, por ende se vulnera la causal tercera del artículo 143 de la ley 734 de 2002.

Las etapas dentro del proceso disciplinario son preclusivas, y al momento del despacho tomar la decisión de cerrar la investigación y evaluarla, cerro la etapa investigativa, y paso a la etapa de los cargos, pero resulta que las "pruebas" y las coloco en comillas, no existen, porque como lo he indicado, está sustentando el cargo, es con unos elementos materiales probatorios que por sí solos, no son prueba.

La etapa de investigación disciplinaria¹, sus términos son de 12 meses, tiempo en el cual debe cerrar investigación², al formular pliego de cargos³ en el mes de agosto de 2015, paso a la etapa siguiente, por consiguiente no podía devolverse a la etapa probatoria, como lo hizo el operador disciplinario del Departamento de Policía Valle, al realizar un auto de prórroga por nueve meses, situación vulneratoria del debido proceso, las etapas están establecidas para respetarlas y acatarlas por los encargados de hacer efectiva la justicia y sobre todo el respeto por el derecho y con ello respetando la dignidad humana del disciplinado a la luz de la Constitución Nacional.

Si bien es cierto, existe independencia entre el derecho disciplinario y el derecho penal, y no es necesario que se dé una condena para poder tomar decisión en lo disciplinario, como lo indico la C-720 de 2007, lo cierto es que para la consecución de la prueba se debe respetar los principios y derechos consagradas en su recaudación, en el presente caso, se está vulnerando el derecho del Debido Proceso artículo 29 de la Constitución Nacional, y los artículos 6 , 7, 8 y 17 de la ley 734 de 2002.

Sobre la distinción entre el derecho disciplinario y penal la Corte señalo en la C-124 de 2003, lo siguiente:

(..)

¹ Artículo 156 ley 734 de 2002, modificado por el artículo 52 ley 1474 de 2011.

² Artículo 160ª ley 734 de 2002, adicionado por el artículo 53 ley 2474 de 2011.

³ Artículo 161 y 162 de la ley 734 de 2002,.

Acerca de la distinción entre el Derecho Disciplinario y el Derecho Penal la Corte ha señalado:

“Así las cosas, cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se evalúa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios. En el proceso disciplinario contra servidores estatales se juzga el comportamiento de éstos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública; en el proceso penal las normas buscan preservar bienes sociales más amplios.

“Si bien es cierto que entre la acción penal y la disciplinaria existen ciertas similitudes puesto que las dos emanan de la potestad punitiva del Estado, se originan en la violación de normas que consagran conductas ilegales, buscan determinar la responsabilidad del imputado y demostrada ésta imponer la sanción respectiva, siguiendo los procedimientos previamente establecidos por el legislador, no es menos cierto que ellas no se identifican, ya que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo. Dichas sanciones son impuestas por la autoridad administrativa competente o por la Procuraduría General de la Nación, ente que tiene a su cargo la vigilancia de la conducta oficial de los servidores estatales.” Sentencia C-244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. S. V. de Eduardo Cifuentes Muñoz y Julio César Ortiz Gutiérrez (...).

DESVIACIÓN DE PODER: Como es bien sabido, la presente causal se presenta cuando el agente administrativo realiza un acto que cabe dentro de sus atribuciones; observa todas las formalidades prescritas por la Ley; el acto se ajusta en sus términos a las normas superiores; pero al proferirse, se tienen en cuenta motivos distintos de aquellos para los cuales se confirió el poder.

En el caso que nos ocupa la institución, en cabeza inicialmente del fallador de Primera Instancia utilizó todo su poder para cumplir

como fuera con su cometido que era destituir a mi representado, así no existieran pruebas para hacerlo, pues en este caso no existió ni presunción de inocencia, se vulnero claramente el derecho a la defensa, el debido proceso y el juez disciplinario no lo aplico debiendo ser obligatoria la sujeción a dicho principio en todas las actuaciones administrativas, aplicando o recortando el juez disciplinario las garantías de mi representado quien era el destinatario de la ley disciplinaria.

No se pudo obtener la verdad en dicho proceso toda vez que jamás existió plena prueba y aun así sin demostrar el juez disciplinario que mi mandante hubiese infringido la ley y haber cometido falta disciplinaria, le aplico la máxima sanción, vulnerando sus derechos fundamentales. El debido proceso constitucional para determinar responsabilidad exige la ilicitud sustancial de comportamiento, cosa que no logro siquiera probarse en este caso.

Más triste aun cuando el fallador de Segunda instancia, se limita a repetir lo manifestado por el fallador de primera instancia, sin ni siquiera detenerse analizar cómo se hizo o se llevó este proceso, olvidando que el proceso disciplinario es un proceso reglado que le impide al Juez realizar las cosas o surtir las diferentes etapas del mismo a su antojo o amaño.

Con la expedición del acto impugnado, la actuación de la Administración lo que hizo fue dar apariencia de validez al retiro del Actor, porque tampoco se iba a detener el Director General de la Policía a hacer un análisis de dicho proceso. Nótese como la institución maneja a su amaño dicho proceso, cuando hasta en la notificación de dicha Resolución se equivoca y arbitrariamente corrige o realiza una notificación indebida de la misma.

FALSA MOTIVACIÓN. “FALSA MOTIVACION – Concepto / FALSA MOTIVACION – Error de hecho o de derecho / DESVIACION DE PODER – Concepto / EXPEDICION IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Falsa motivación La falsa motivación, se constituye en un vicio del acto administrativo, de aquellos que el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo categoriza como vicio material, al igual que la emisión del acto con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que lo profirió. La falsa motivación se traduce en aquel error de hecho o de derecho que en determinado momento puede afectar la legalidad del acto y el desvío de poder, en la intención con la cual la autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece a un propósito

particular, personal o arbitrario. Ahora bien, la falta de motivación, bien puede interpretarse como el vicio formal denominado expedición irregular, que particularmente acontece cuando se emite el acto administrativo sin sujeción a un procedimiento y a unas fórmulas determinadas; referido no solo a su mera condición exterior, sino a la inobservancia de las exigencias expresas de la ley para ciertos actos, como cuando aquella ordena que sea adoptado únicamente por escrito o con expresión de los motivos, vale decir, con motivación explícita y obligatoria”.

EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO

La administración se apartó de los preceptos Constitucionales, cuando tomó la determinación de expedir la resolución No **04187** de fecha 27 de Junio de 2016, por medio del cual ejecutan la sanción disciplinaria del actor, cuando el proceso disciplinario DEVAL-2104-57, presento vulneración del Derecho del Debido Proceso, solamente ante hechos de terceros que solo buscaban beneficios de rebaja de penas, donde en el expediente nunca se probó la conducta porque no se permitió por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario del Departamento de Policía Valle, ejercer un verdadero derecho de contradicción que hubiera conllevado a tomar otra decisión que no afectara los derechos mínimos establecidos en la Carta Política.

CAPÍTULO V.

PRUEBAS:

Allego como tales las siguientes documentales:

- 1) Copia simple del proceso disciplinario DEVAL 2014-57 de llevado en la Oficina de Control disciplinario Interno del Departamento de Policía Valle en contra del señor Patrullero **ARTURO MANUEL AMELL PEREZ**.
- 2) Copia simple del auto de fecha 19 de mayo de 2016, mediante el cual confirmo el fallo de primera instancia proferido por el señor teniente Coronel Inspector Delgado de la Región 4 de Policía

- 3) Copia de la Resolución N° **04187** de fecha 27 de Junio de 2016, por el cual se retira del servicio activo de la Policía Nacional al señor Patrullero **ARTURO MANUEL AMELL PEREZ**, emitido por el señor Director General de la Policía Nacional.
- 4) Copia auténtica de la Notificación Personal de la Resolución N° **04187** de fecha 27 de Junio de 2016, mediante la cual se retiró del servicio activo de la Policía Nacional señor Patrullero **ARTURO MANUEL AMELL PEREZ**, de fecha 12 de julio de 2016.
- 5) Copia de la Notificación personal del auto aclaratorio de corrección de investigación disciplinaria de fecha 04 de octubre de 2016, mediante la cual corrigieron la notificación de la resolución No **04187** de fecha 27 de Junio de 2016, por la cual ejecutaron la sanción de destitución al señor Patrullero **ARTURO MANUEL AMELL PEREZ**,

CAPÍTULO VI.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

En la presente Acción se solicitan perjuicios Morales, Materiales por la expedición irregular de los Actos Administrativos Resolución No **04187** de fecha 27 de Junio de 2016, emitido por la Dirección General de la Policía Nacional, por el cual retiró del servicio activo de la Policía Nacional al señor Patrullero de la Policía Nacional **ARTURO MANUEL AMELL PEREZ**, así como el fallo disciplinario DEVAL 2014-57 de fecha 15 de abril de 2016, proferido por el Jefe de la Oficina de Control disciplinario Interno del Departamento de Policía Valle, y el auto de fecha 19 de mayo de 2016, mediante el cual confirmo el fallo de primera instancia proferido por el señor teniente Coronel Inspector Delgado de la Región 4 de Policía, mediante el cual destituyeron al actor, notificado personalmente de la citada resolución el día 4 de octubre de 2016, transcurrieron cinco (5) meses, desde su desvinculación a la fecha de la presentación de la presente demanda, con salario de \$1.452.922,80 lo equivale a suma de \$ 7.264.614.

CAPÍTULO VII.

COMPETENCIA

Son competente Señores Magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para conocer de éste proceso en Primera Instancia, por la naturaleza de la acción, por el factor territorial en donde prestó sus servicios el señor Patrullero **CARLOS MANUEL AMELL PEREZ**, como ultima unidad de policía donde laboraba el Actor antes de su retiro.

CAPÍTULO VIII.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

Invoco como normas de derecho las siguientes:

- Constitución Política: Artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53, 92, 123 y 218.
- ley 734 de 2002, articulo 92, numeral 4, 135, 156.

CAPÍTULO IX.

LA ACCIÓN

La Acción es el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CAPÍTULO X.

PROCEDIMIENTO

El proceso habrá de rituarse por el procedimiento oral, indicado en los artículos 179 y ss del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CAPÍTULO XI.

PETICIÓN PREVIA

Manifiesto al señor Juez, bajo la gravedad de juramento, que los documentos que contienen los Actos Administrativos Acusados

que se anexan, fueron los que la Policía Nacional entregó al Actor, no obstante, que la demandada deberá allegar junto con la contestación de la Demanda copia Auténtica de los mismos.

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

En cumplimiento a las disposiciones legales previstas en la ley 640 de 2001 y 1285 de 2009 sobre conciliación prejudicial en materia administrativa, esta etapa se agotó el día 20 de enero de 2017, en la Procuraduría 165 Judicial II Para Asuntos Administrativos del Valle del Cauca.

CAPÍTULO XII.

ANEXOS.

- 1.- Poder para actuar.
- 2.- Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
- 3.- Copia de la demanda y sus anexos en **CD-ROOM**, para traslados a las entidades demandadas y copia simple para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.
- 4.- Copia de la Demanda en Medio Magnético **CD-ROOM**
- 5.- Copia de la constancia de no conciliación de la Procuraduría 165 Judicial II Para Asuntos Administrativos del Valle del Cauca.

CAPÍTULO XIII.

NOTIFICACIONES:

- I. Las Entidades Demandadas **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL** Policía Nacional Bogotá, Oficina de la Dirección General, Transversal 45 No. 40-11 CAN, Bogotá D.C., en la Oficina de Defensa Judicial de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, Calle 21 N° 1 N - 65 Piso 4, del Comando del Departamento de Policía Valle.

E-Mail: mecalgrunejefat@hotmail.policia.gov.co
deval.notificacion@policia.gov.co

III. La Defensa Jurídica del Estado Carrera 7 No 75-66 piso 2 y 3 Bogotá D.C., teléfono 2536569 , Extensiones: 406 - 407

E-Mail: conciliaextrajudicial@defensajuridica.gov.co

IV. Mi representado, por conducto del Apoderado, en la Calle 10 N° 4-40, Bolsa de Occidente, Oficina 402 de Oficina 402 de la Ciudad de Cali (Valle).

V. La de esta Profesional del derecho en la Calle 10 N° 4-40 Edificio Bolsa de Occidente, Oficina 402 de la Ciudad de Cali (Valle).

E-mail / aguirre-gonzalez@hotmail.com

Sírvase señores magistrados reconocermé personería para actuar en el proceso en calidad de apoderada.

De los señores Magistrados, atentamente,

CLAUDIA JIMENA GONZALEZ GARCÍA

C.C. N° 67.013.081 de Cali (V)

T.P. N° 128.345 del C.S.J.